

# EL OCCIDENTE,

DIARIO POLITICO.

Miércoles 28 de noviembre de 1855.

AÑO I.—NUMERO 274

EDICION DE LA MANANA.

## ADVERTENCIA.

Advertimos a nuestros suscritores, cuyo abono concluye en 30 del actual, que se sirvan renovar para no sufrir retraso en el recibo de los números.

MADRID 28 DE NOVIEMBRE.

Nuestro estimado colega la *Espeja*, después de aceptar como suyas las ideas de los artículos firmados que está publicando sobre Bancos, inserta ayer una réplica a las observaciones que el jueves último hicimos. A uno de ellos, que vio la luz pública en sus columnas el día anterior. La forma de esa réplica, reducida principalmente a rectificar varios de nuestros asertos, nos deja ya estrecho espacio para continuar la polémica, a la cual por otra parte manifiesta deseos de renunciar el articulista de la *Espeja*.

En estos supuestos, tal vez no volveríamos a tratar hoy del asunto, si no nos interesara consignar ciertas aclaraciones. Ante todas cosas, es traíamos y sentimos que después de comenzar su artículo declarando que en nuestra impugnación había habido moderación y cortesía, y dándonos gracias por la manera con que le habíamos tratado, nos dirija el escritor, con quien discutimos, estas amargas y poco justas quejas:

«Hace también argumentos inexactos el *Ocidente*, y que no son de la mejor ley. No he manifestado en ninguna parte de mi artículo aire de triunfo al asegurar que, después que las Cortes aprueben la creación de la Caja, todos los esfuerzos para establecerla se estrellarán contra la fuerza actual de inercia del pueblo español. El interpretar así mis sentimientos, no es justo ni conveniente a la imparcialidad de la discusión.

«Creo positivamente (y no sé como el *Ocidente* asegura lo contrario), que no se admitirá por las Cortes un proyecto tan mal calculado, y esto lo repito en varias partes de mi artículo.

Para que nuestros lectores aprecien por sí mismos el punto en cuestión, y no nos esponamos nuevamente a engañarnos, he aquí las palabras del primer artículo de la *Espeja*, a que en el nuestro nos referíamos.

«Si como nos hallamos en una época de temor y de desconfianza, no encontrásemos en tiempos de animación y de entusiasmo, el furor banquero que se ha desarrollado, pudiera ocasionar funestísimos desastres. Pero toda la inesperienza de los diputados, y todo el ardor febril de los proyectistas, se estrellarán contra la fuerza actual de inercia del pueblo español.

Estas palabras, puestas al final del artículo de la *Espeja*, como si fueran el resumen y el último esfuerzo de los razonamientos empleados para probar que en España no pueden fundarse establecimientos de crédito; estas palabras, colocadas después de comparar con insistencia el estado político y económico de nuestra patria con el desastroso de las más desventuradas repúblicas americanas, nos hicieron decir que la observación de nuestra postración nacional era para el articulista de la *Espeja*, no solo una consideración que él mismo lamentaba al tiempo de exponerla, sino también hasta cierto punto una esperanza que le impulsaba a tomar aires de triunfo en este asunto. Claro está que esto no podía ser jamás entendido como una acusación de falta de patriotismo que ni venía a cuento ni habría tenido objeto. Es igualmente indudable que no ha habido motivo para tachar nuestros argumentos de inexactitud, ni para censurarlos como de mala ley, y que mejor habría sido no formular esas quejas, a todas luces injustas.

No es mas fundada la segunda reconvencción que se nos hace por haber supuesto que, en la opinión de nuestro contrincante, el proyecto de la caja general de crédito será aprobado por las Cortes. Pues no dice explícita y terminante que la inesperienza de los diputados y el ardor febril de los proyectistas se estrellarán contra la inercia del pueblo? Si el proyecto no es aprobado por la Asamblea, contra la repulsa de esta se estrellará; para que suceda que se estrelle contra la fuerza de inercia del pueblo como se anunciaba usando el verbo estrellar en futuro absoluto, y sin aludir a ninguna condición, es preciso que el proyecto haya encontrado el apoyo de la ley, aunque necesitara deber ese apoyo a la inesperienza de los diputados.

Todavía hay una tercera queja contra nosotros, porque digimos que la doctrina del articulista de la *Espeja*, bien examinada, vendría a quedar reducida a la fórmula de que no deben fundarse establecimientos de crédito, hasta que las operaciones de crédito hayan tomado un desarrollo extraordinario. No supusimos, ni pudimos suponer, ni dar a entender que había presentado en esos términos la cuestión; solamente apreciamos sus raciocinios de ese modo, y ciertamente no tenemos que modificar nuestro juicio, pues su artículo de ayer está concebido en el mismo espíritu.

En efecto, todo el descanso en la idea de que no hay que pensar en España en Bancos de emisión, ni en cajas de crédito, porque el mercado de Madrid tiene escasas fuerzas, porque nuestra corte no tiene importancia industrial; porque no tenemos orden ni gobierno; porque las sociedades anónimas invierten mal fin en 1847, y porque España se parece en lo político y económico a Méjico, y demás provincias hispano-americanas.

Insistimos en que hay en todo esto un círculo vicioso de ideas. Si el mercado de Madrid tiene escasas fuerzas, consiste solo en que la circulación de su numerario y sus operaciones de crédito, están reducidos a estrechas proporciones; de lo cual, en vez de deducirse la conveniencia de poner estorbos a lo que tiende a aumentar esa circulación del metálico y ese desarrollo del crédito, se debe deducir todo lo contrario. Si la corte no tiene importancia industrial, debido es al sistema de estrechas miras y de meticulosas especulaciones que hasta hoy se ha seguido, y no se conseguirá ciertamente la mejora de ese sensible estado de cosas, condeando los proyectos que tienden a desenvolver los recursos del crédito, y a dar impulso a la industria y al comercio. Si no tenemos orden ni gobierno, quizá la causa primordial del desorden y del desorden, se encuentra en que la falta de empresas particulares, en que pueden ejercer su actividad los españoles, los impele casi en masa a buscar su manutención en la política y en el presupuesto del Estado. Si las sociedades anónimas tuvieron mal éxito en 1847 la culpa fué de los casi increíbles abusos que se cometieron en su formación; abusos que ya hoy no son tan fáciles; la culpa fué de la absoluta inesperienza de los contratistas; inesperienza que hoy no existe de un modo tan absoluto; la culpa fué de la completa carencia de garantías, y a veces hasta de objeto, de aquellas sociedades, lo cual no puede decirse en el caso en cuestión. De todas maneras, del ejemplo de las sociedades anónimas de 1847 no deducirá nadie que no deben permitirse las sociedades de esta clase, así como los abusos cometidos en ciertas épocas en la Bolsa no prueban que deba suprimirse la venta pública y oficial de los fondos públicos; así como los desengaños sufridos por las sociedades mineras no quieren decir que debe ser abandonada la explotación colectiva de las minas; así como las catástrofes de los proyectos de Law en Francia, y las malas épocas de los Bancos nacionales de los países mas poderosos y adelantados, hechos que también citó el erudito y estimable escritor a quien contestamos, no pueden alegarse como un argumento contra las empresas de crédito, ni contra la existencia de los Bancos nacionales.

De la misma manera, si España, con sus continuos pronunciamientos, con su desconcierto gubernamental, con sus vaivenes políticos continuos se parece a los pueblos de la América del Sud, la manera de hacer que semejante coite, cuya exactitud admitimos solo hasta cierto punto, llegue a ser imposible, no está en imitar en esta ni en ninguna otra materia a aquellos pueblos; no está en volver a ellos la vista, como el articulista de la *Espeja* pretende, y atenernos en el arreglo de nuestra conducta a lo que en ellos pasa. Está, por el contrario, en seguir las huellas de las naciones prósperas y adelantadas en arrojarse con decisión por el camino de las mejoras y del progreso verdadero, en no desanimarse ante los obstáculos, en no darse por vencido porque una empresa haya salido en otros tiempos mal, en romper la tradición de los monopolios infecundos, y en convidar, en vez de rechazar rutinariamente, para la obra de la regeneración económica de la patria a los capitales, y a los esfuerzos de los extranjeros, a quienes las guerras, las revoluciones, (que también fuera de España hay revoluciones y guerras de todas clases) o tal vez, la misma plétora de la riqueza de otros países aparten del suelo natal para traerlos a esta porción del mundo tan favorecido por el cielo, y tan poco próspera hasta hoy por la histórica fuerza de inercia de sus moradores.

Tras una larga y violenta carrera preciso es aflojar el paso para tomar aliento. Tal debe ser la opinión de las Cortes que después de acalorados debates discuten estos últimos días con una calma y una frialdad, que desprecian a los que asisten a la tribuna pública, gente aficionada a las grandes emociones.

La sesión de ayer fué tan fría como la del día anterior. En el despacho ordinario se dio cuenta de varias exposiciones, entre las que recordamos una de la diputación provincial de Cuenca, reclamando contra el aumento en la contribución territorial, otra de la de Lérida solicitando autorización para repartir 5,000 rs. con destino a la construcción de un cementerio, otra de la de León proponiendo arbitrios extraordinarios, otra de la de Toledo haciendo

observaciones sobre la ley de diputaciones y ayuntamientos, otra de la de Barcelona reclamando contra la reforma arancelaria, y otra de la de Oviedo sobre sustitución de quintos.

El señor Rodríguez Pinilla anunció una interpelación al gobierno sobre la derrama de 23 millones para completar el anticipo de 280.

El señor Ruiz Pons recomendó en seguida una exposición del ayuntamiento de Santiago para que se restablezca aquel partido administrativo, y las Cortes acordaron que pasase a la comisión de presupuestos.

El Sr. Labrador leyó un voto particular sobre el de ingresos, contrario al restablecimiento de puertas y consumos.

El Sr. Latorre invitó a la comisión de responsabilidad ministerial a que presentara cuanto antes su dictamen. El Sr. Garrido contestó que si la comisión no lo ha hecho ya, ha sido por no haberse reunido número suficiente de individuos.

Pasó inmediatamente a la orden del día y empezaron los debates con el artículo 152 de la ley de reemplazos. Sucesivamente se fueron aprobando todos los que quedaban por votar sin mas debate que uno muy animado que originó el 165.

El Sr. Orense le combatió a su manera en el concepto de que la organización de los ejércitos por medio de quintas es un poderoso auxiliar de la tiranía.

El Sr. Escosura se encargó de contestar al señor Orense, y lo hizo cumplidamente demostrando que el sistema propuesto por la comisión es el mas a propósito para tener ejércitos que a la vez sean defensores de la libertad y del orden.

Cuanto es este tan controvertido y sobre todo en las actuales Cortes, que no debemos pararnos mucho en él.

Concluida, pues, la discusión de la ley de reemplazos, se anunció que quedaba sobre la mesa copia de los expedientes sobre negociaciones con el Tesoro, remitida por el señor ministro de Hacienda, en cumplimiento de la promesa que días pasados hizo a las Cortes.

Continuando los debates sobre la ley fundamental, se dió principio por el 54, relativo a los casos en que las Cortes pueden escusar de la sucesión de la corona a los que sean incapaces de gobernar, é indignos de ese derecho.

El señor D. Ignacio Yañez Rivaldeneira, se opuso a que en estos casos se prescindiera de la intervención.

Defendido el artículo por el señor Heros, no con muy sólidas razones, se aprobó por 176 votos contra 14.

El 66, en que se consigna que a los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar, y que se ejecute lo juzgado, fué combatido por el señor Llanos y defendido por el señor Sancho, quien sostuvo que la comisión al redactarlo así, había tenido presentes los mas autorizados principios de la jurisprudencia.

El 67 concebido en los siguientes términos. «Las leyes determinarán los tribunales y juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que hayan de tener sus individuos.»

—fué tenazmente combatido por el señor Orense, quien le consideraba innecesario y ridículo.

El señor Olózaga protestó contra esta calificación y demostró, aunque no con la lucidez que acostumbraba, que de no existir el artículo sería el gobierno árbitro de las resoluciones del poder judicial.

En este debate tomaron también parte el marqués de Tabuérniga y algun otro diputado, y el artículo se aprobó como tambien el 68, el 69 y el 70, que hace a los jueces personalmente responsables de las transgresiones de ley, principio que combatió el señor Gomez de la Serna, con los conocimientos que le son notorios en materias jurídicas.

La importantísima votación de las constituciones, prescribiendo en la ley fundamental el establecimiento del Consejo de Estado, es un desagravio aunque tardío, completo a los ultrajes que sufrieron el sentido común y los buenos principios de recta administración, cuyas tradiciones había conservado en toda su pureza el alto cuerpo consultivo, que había sido el valladar en que se estrellaron todos los proyectos de la arbitrariedad ministerial.

Cuando, cediendo a la fuerza irresistible de la opinión, y a la muy imperiosa necesidad del poder ejecutivo, que no puede funcionar provechosa y ámpliamente, sin la cooperación del supremo consejo administrativo, se introdujo la adición del Estado en el código político; dignos que el Consejo Real había obtenido tan pronta como merecida apoteosis, y hoy debemos añadir, que el país cuenta ya con una de las mas preciosas garantías de sus intereses, de las que se había visto privado por los delirios de la revolución o las invasiones de la ignorancia.

PROVINCIA. En las principales librerías y por librería franca al administrador del periódico, un mes 16 rs., tres meses 46. *Extranjero*. Un trimestre, 72, seis meses 144. En París en casa de los señores Saavedra y Ribelles, rue de Hauteville, 15, y en la librería Española, rue de Provence, 47. Trés meses 90, seis meses 180.

Basta solo tener algunas nociones de la ciencia de gobierno, y poseer alguna experiencia en los negocios públicos, para conocer que las luminosas doctrinas esplanadas sobre este asunto por el señor Rios Rosas en el seno de la representación nacional son incontrovertibles; y para convencerse de que apartándose de ellas, solo se camina a la desorganización, al caos y a la anarquía en que nos han sumido los absurdos de la vetusta y desacreditada legislación, resucitada en momentos de aflicción y vértigo, por los mismos que al arrepentirse de su obra fueron víctimas de su sinceridad y leal arrepentimiento.

La circunstancia de que ninguno de nuestros estimables colegas progresistas y conservadores ha ido mas allá que nosotros en la amplitud de la libertad que deseamos para la imprenta, y el vivo, sincero y constante interés que sin cesar desplegamos en defensa del ejercicio de este derecho nos mueven a decir algunas verdades importantes en las actuales circunstancias.

Al paso que el ministerio fiscal de Madrid, dando, con muy pocas escepciones que reconocemos y consideramos justamente, pruebas de escaso criterio entablaba denuncias que necesitaban de ser elevadas al jurado para ser sometidas a juicio, se dejan correr gravísimas ofensas al mas elevado de los poderes del Estado, al único inviolable, a la augusta persona del monarca y a su escelsa familia.

Y entretanto que esto se observa los pueblos ven con disgusto que se manifiesta en favor de los ministros responsables el absurdo esceso de celo de querer inventar el imposible de que se cometan desacatos por medio de la prensa; y sienten acrisolarse su fe monárquico-liberal, contemplando que las audiencias y los jueces rechazan aquella heresia política, que los hubieran conducido al mas brutal fetichismo, y se avergüenzan de que se hubiese galardonado con lucrativos destinos, a los que iniciaron la cruzada de las irreverencias y los insultos contra el trono.

¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Que se dan escándalos inútiles en los que el poder ministerial se ve corrido; que el tribunal del pueblo, absoluto en justicia y conciencia lo que debe absolver; y que los verdaderos escoscos que se cometen desde la última revolución en el periodismo solo pasan desapercibidos para el gobierno, principal encargado de vigilar por el cumplimiento de las leyes.

En la correspondencia últimamente recibida de Cataluña, se asegura que los Tristanyes, resueltos ya a meterse en Francia, sin duda por el valle de Andorra, estuvieron en Madrona en número de 27 oficiales, 10 soldados y los 4 gefes. Con la red de columnas que se les ha tendido, y con el entusiasmo del país, se dificulta que aquellos cabeceles puedan alcanzar la frontera.

La diputación provincial de Barcelona ha elevado a las Cortes una exposición pidiendo a la Asamblea constituyente que deseché el proyecto del señor ministro de Hacienda en lo que afecta sensiblemente a nuestra producción fabril, y sobre todo en punto a la adición de los bilados de algodón de 20 hilos, adoptando en su alta sabiduría aquellas medidas prudentes y razonables que para la debida conciliación de todos los intereses reclaman la justicia y la conveniencia pública.

La misma corporación ha dirigido últimamente otras tres exposiciones a Madrid, una elevada a S. M., y dos a las Cortes. Los diputados provinciales barceloneses no descurian el ejercicio del derecho de petición.

Todavía no se han orillado todas las dificultades para organizar la fuerza ciudadana en Barcelona.

Continúa en el Principado catalán la presentación a indulto de muchos facciosos.

La Reina (Q. D. G.) ha tenido a bien conceder el regimiento de guardias, con fecha 24 del actual, a don Bartolomé Vidal, nombrado cónsul de Venezuela en Barcelona.

El gobernador capitán general de Puerto Rico, con fecha 2 de octubre próximo pasado, participa que la tranquilidad pública continúa sin alteración en aquella isla, y que el estado sanitario mejora notablemente, habiendo desaparecido casi enteramente la fiebre amarilla que la afligía.

En la correspondencia de Cataluña que está llegando a Madrid con notable retraso, leemos: «Se ha advertido en Sans cierta inquietud entre los trabajadores a consecuencia de haberse anunciado como próximo el cierre de dos fábricas; pero a estas horas podemos asegurar que no se ha cerrado aun ninguna. Solo si alguna de ellas hubiese suspendido en parte sus trabajos.»

El caballerizo que tuvo la honra de hallarse de servicio la tarde en que S. M. dió la alta prueba de munificencia que ya conocen nuestros lectores, ha publicado los accidentes del hecho que confirman sustancialmente la noticia

que sobre él dió el primero nuestro periódico

Al regresar SS. MM. de Atocha, y al entrar a tole en la Carrera de San Jerónimo, se arrojó una mujer, no anciana, a la portezuela con objeto de entregar un memorial; pero con tal imprudencia é imprevision tan atroz, que el jefe de carrera que iba a aquel lado (no el caballerizo) no pudo contener su caballo, y sin que nadie lo pudiera remediar, la pasó por encima.

SS. MM. me mandaron me informase del estado en que se hallaba, la hiciera conducir en el coche de respeto a su casa, tomando las señas; así lo efectué, y apenas de regreso en palacio, donde SS. MM. me esperaban llenos de inquietud, volví a salir en un coche con dos caballos, y acompañado del señor de Sanchez, primer médico de cámara, y del gentil-hombre señor de Ozares, dirigiéndose a la habitación de la mujer, a quien llevaban en persona el socorro que el médico de v. d. indicaba, y el inapreciable don de sus consejos, su bondad y sus lágrimas.

La escena que allí presencié, las palabras que me dijeron entre SS. MM. y la enferma, la conmoción de la Reina, jamás se borrará de mi memoria. ¡Ojalá que todo el país hubiera estado allí!

Para que se vea cuán repetidos y justos son los deseos que el tribunal del pueblo recibe el ministerio léase lo que ayer dice *La Voz del Pueblo*:

«Reunido el jurado para declarar si había lugar o no a formación de causa por un artículo inserto en el número del día 23, declaró por unanimidad no haber lugar, por lo cual reproducidos en este número el artículo que dió lugar a la recogida y denuncia.

Para satisfacción del señor fiscal debemos hacerle presente que el artículo denunciado y recogido había sido publicado hace bastante tiempo, y durante la dominación moderada, en un periódico no político, lo cual dice mas que cuantas reflexiones pudiésemos nosotros añadir.

«Dichos tiempos los que alcanzamos, en que ya no nos es posible publicar lo que pasaba en periódicos puramente literarios, cuando la prensa estaba mas perseguida!»

Como un hecho importante, en confirmación de la necesidad del Consejo de Estado, cita el diario ministerial los siguientes datos, relativos al extinguido Consejo Real.

«Durante su existencia fueron consultados por esta corporación sobre 17,000 expedientes. De estos, 800 pertenecían a lo contencioso, ó sea pleitos entre la administración y los particulares; y próximamente otros tantos, se resolvieron como competencias: siendo de notar, en prueba de los beneficios de la jurisprudencia, que estas cuestiones disminuían sensiblemente a medida que aquella se iba formando, y en la proporción siguiente, desde 129 que se consultaron en el año de 47, hasta unas 40 resueltas el 55.

Hoy, según nuestros informes, no está lejos de 100 el número de pleitos, y aparte otros negocios de naturaleza diversa, por cientos entran también las cuestiones de competencias, autorizaciones, quintas, etc.: sometidas a informe en el tribunal contencioso-administrativo, agobiado con el cúmulo de trabajos que pesan sobre su escaso personal.

Estos datos y las manifestaciones hechas recientemente por algunos de los órganos del partido progresista, contienen las mas flagrantes refutaciones de las injustas y apasionadas censuras que antes dirigían al elevado cuerpo administrativo que, como el Senado, reunía en su seno a los hombres públicos prudentes y experimentados y a las capacidades de todos los partidos.»

SS. AA. RR. los Serenos, señores Infantes duques de Montpensier, se embarcaron en Cartagena el día 19 con dirección a Cádiz; después del desembarco que tuvieron de gran gala, con motivo de los días de S. M. la Reina, recibiendo SS. AA. en la casa del comandante del arsenal, a todas las autoridades, corporaciones y personas distinguidas.

Llegaron a San Lúcar el 21; y en el muelle de Bonanza fueron recibidos por todas las autoridades, asistiendo después al *Tu-Deum*, que el ayuntamiento de dicha ciudad había dispuesto, por la feliz llegada de SS. AA., que se habrán trasladado a Sevilla el domingo 25.

En uno de estos últimos días, ha tenido el Sr. don Leopoldo Augusto de Cueto, la honra de ser recibido en audiencia particular por S. M. la Reina. Los relevantes servicios que el señor Cueto ha prestado en la difícil misión a los Estados Unidos de América, la dignidad, inteligencia y tacto con que ha conducido las delicadas negociaciones diplomáticas, que han ocurrido durante su permanencia en Washington, le hacían acreedor a las distinciones soberanas, y S. M., que tan bien sabe apreciar el verdadero mérito, se ha esmerado en darle pruebas de estimación.

Ya ha tenido lugar ante el juzgado del Prado la vista de la causa de don Agustín Perales. El local del juzgado estaba ocupado por una concurrencia tan numerosa como lo permitían sus dimensiones, entre la cual se contaban personas de notoria ilustración y de la mejor sociedad de Madrid. El abogado defensor, señor Noedal, que durante cerca de dos horas ocupó la atención del tribunal, pronunció un elocuentísimo discurso, en el que logró poner en claro, no solo la inocencia de su defendido, sino la realidad y naturaleza de las intrigas que le dieron origen, y que harían del asunto, a lo que puede presumirse, uno de los mayores escándalos de la dominación actual.

Por lo demás, la inculpabilidad del procesado estaba ya fuera de cuestión, y por decirlo así, prejuzgada, habiéndose pedido, por el promotor fiscal de la causa, que se le absolviera libremente y se condenase en cambio a muy graves penas a sus pretendidos cómplices, y falsos delatores. A esto ha venido a reducirse aquella temerosa y vasta conspiración pacífica, que sirvió de tema durante casi todo el verano a los clamores de la prensa de la situación y a



las rigurosas y graves medidas del gobierno. (Qué eschaza para los que cándidamente pudieron haber prestado asenso a aquellos falsos anuncios! Qué des- crédito para el gabinete y para la situación!

El cónsul español de Liverpool al director de Ultramar.—Lunes 26 de noviembre de 1855.— Llegó hoy el *Bathe*.—Habana 8 de noviembre. La tranquilidad pública continúa sin alteración en la isla, siendo satisfactorio su estado sanitario. El vapor-correo *Isabel la Católica* llegó el 3 del corriente sin novedad, debiendo salir con la correspondencia pública el 12 para la península.

La sección de Hacienda de la comisión de presupuestos se ocupó últimamente en examinar la sección 45, que trata de los gastos de las contribuciones y rentas públicas. Aprobóse la mayor parte de los capítulos de que consta; pero quedaron algunos en suspenso hasta reunir los datos que se necesitan para dar sobre ellos un fallo definitivo.

La comisión sobre la esposición del general Pezuela se ha constituido nombrando por su presidente al Sr. Serrano Domínguez, y secretario al Sr. Galvez Cañero.

Se ha reunido la de presupuestos, y la de reforma de leyes marítimas.

También se reunió ayer la de ley orgánica de teatros, y acordó pedir al gobierno los expedientes relativos a esta materia.

El jurado absolvió ayer por unanimidad un artículo de *El León Español*. La notable y elocuente defensa que hizo del artículo denunciado el señor Castelar contribuyó poderosamente a este resultado.

El joven orador tuvo muchos momentos felices y se mostró verdaderamente inspirado al animar al ridículo pavor de los que abandonaban sus puestos por temor a la muerte, que para los cristianos es el principio de la vida, y al formar un paralelo entre las virtudes y el heroísmo de las hijas de la Caridad y la miseria pusilánimidad de los diputados que no acudían a llenar sus deberes de miedo al cólera.

Tesoro, que se refiere a la individualidad colectiva que forma cada pueblo, repartiéndola sobre los dos bases, de vecindario, y ventajas económicas de que cada uno disfruta.

Parece que los conservadores que hay en la comisión de presupuestos, han negado su firma al voto particular del Sr. Zafra, por las ideas políticas que se emiten en el preámbulo, pero esto no obstante, será apoyado por otros varios miembros de la comisión de presupuestos.

Fuera de estos dictámenes, parece se presentarán otros de los Sres. Sanchez Silva y Muchada, ampliando el derecho de puertas a toda población importante, y estableciendo en las demás el derecho de patentes, de la minoría democrática y ultra-progresista, negándose a todo establecimiento así de las puertas como de los consumos, y por último, los planes de Hacienda de los Sres. Gamunde y Labrador.

Esta anarquía de opiniones, nacida de que no hay un ministerio de bastante prestigio e influencia en la Asamblea, y de que tampoco existen oposiciones verdaderamente gubernamentales, prolongará indefinidamente los debates y hará que sea muy difícil prever su éxito. El restablecimiento de las puertas es, sin embargo, una cosa indudable.

Las noticias que recibimos de algunas provincias donde la carestía de los artículos de primera necesidad va en aumento, nos aseguran que se reciben insidiosas escitaciones de los enemigos del reposo público para que a favor del disgusto que aquella carestía produce, se promuevan trastornos y conflictos como los de Zaragoza.

El gobierno debe redoblar su vigilancia contra los factores de motines y los especuladores de asonadas, lo mismo que contra las demagogías de los logreros. En circunstancias como las actuales no es posible pecar por sobre de celo atendiendo a la ley.

Ayer circularon nuevamente rumores de crisis ministerial. El Sr. Brail sigue en jaque, según los noticieros.

Paris 27 de noviembre.

Fondos franceses.—Tres por 100, 65-70. Idem cuatro y medio por 100, 91-90. Idem españoles.—Tres por 100, interior, 34. Exterior 00.

Amortizable 6 1/2. Consolidados, 89 3/4 a 88 7/8.

## CORTES.

RESIDENCIA DEL SEÑOR INFANTE.

Extracto de la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 1855.

Abierta a la una y cuarto, y leída el acta de la anterior, dijo:

El Sr. CALATRAVA: En la votación de ayer respecto del artículo concerniente al Consejo de Estado, aparece mi nombre en la minoría. Debo declarar, que no he tomado parte en esta votación: me salí del salón de intento antes de que comenzara, y me salí de intento, porque no quería votar en ningún sentido.

El Sr. secretario GONZALEZ DE LA VEGA: No es nada extraño que en las listas de votaciones nominales haya algunas equivocaciones, apareciendo nombres de los que no han votado, y hallándose otros en el sitio que no les corresponde, porque cuando se hacen a última hora, se hacen en medio de bastante ruido.

La mesa espera que en los sucesivos los señores diputados se sirvan dar sus votos desde los puestos que ocupan.

Se acordó que constasen conformes con la mayoría en la votación de ayer los votos de los señores Pardo Osorio, Miguel Romero y Luxan que habían tomado parte en ella, y no aparecían en la lista; y los de los señores Sevillano y Feijó Sotomayor adhiriéndose a la mayoría.

Se hizo presente al Congreso que por las causas expuestas por el señor secretario no aparecía entre los que habían dicho no, el nombre del señor Gomez de la Mata.

A la comisión de actas pasaron 29 pliegos de las elecciones verificadas en algunas provincias.

A la de presupuestos pasó la instancia que dirigía al gobierno la diputación provincial de Lerida para que aprobara los presupuestos del año próximo se fijase el mismo cupo que hoy regía para la contribución territorial.

A las secciones para nombramiento de comisión pasó otra instancia que también remitía al gobierno la diputación provincial de Gerona, pidiendo autorización para verificar una derrama de 15,000 reales para la construcción de un monumento en San Hilario de Segura.

La misma resolución recayó sobre un extracto de los arbitrios extraordinarios concedidos por la diputación provincial de León.

También pasó a las secciones el expediente instruido a instancia del ayuntamiento de Camarasa, pidiendo autorización para verificar un reparto vecinal con objeto de cubrir el déficit de su presupuesto municipal.

Se mandó unir a sus antecedentes una comunicación del señor ministro de Hacienda participando que con fecha 24 del corriente se daba traslado al director de la junta de la deuda, de la esposición de don Juan Camprubi pidiendo el abono por la pérdida de su patrimonio en los años de 1820 al 1825.

A la comisión de bases de diputaciones provinciales y ayuntamientos pasó una esposición de la diputación provincial de Toledo, haciendo varias observaciones sobre el asunto.

A la de aranceles pasó otra esposición de la diputación provincial de Barcelona acerca de los perjuicios que podían resultar de la reforma arancelaria sobre la introducción de hilados y menos hebras que las fijadas en el arancel.

Se recibieron con aprecio y mandaron archivar los tomos I, II, y III del *Diccionario general del notariado de España y Ultramar*, que remitía don José Gonzalo de las Casas.

A la de reemplazos pasó otra de la diputación provincial de Orense, para que se determinase en la ley que no estaban sujetos otros mozos que los sorteados que alegaban causa de inutilidad.

A la comisión de peticiones pasaron dos esposiciones: una de varios vecinos de Valencia, padres de mozos que redimieron su suerte por sustitutos, pidiendo aclaraciones sobre la ley vigente de reemplazos; y otra de don María Calendario de Zalazar pidiendo que se le confirmase una pensión remuneratoria que disfrutaba de cinco mil reales.

El señor don Francisco Santa Cruz participaba que no podía asistir a la sesión por hallarse enfermo.

Se anunció que el señor Carrías ingresaba en la segunda sesión.

El Sr. RODRIGUEZ PINILLA: En dos sábados distintos he pedido la palabra para hacer una pregunta al señor ministro de Hacienda, y no habiendo podido conseguir hacerla la convierto en una interpelación.

El Sr. CALVO ASENSIO: Tan pronto como los comisionados presenten sus trabajos, la mesa de cuenta de ellos, no los detiene nada absolutamente.

El Sr. GARRIDO: Como individuo de esa comisión debo decir, que tan pronto como los señores de esta comisión presenten sus trabajos, la mesa de cuenta de ellos, no los detiene nada absolutamente.

El Sr. LATORRE (don Carlos): Desearía se completase cuanto antes esa comisión para que continuara sus trabajos, porque sino de nada sirve que se nombren comisiones.

El Sr. secretario CALVO ASENSIO: Tan pronto como se sepa qué individuos son los que filan, y las secciones a que pertenecen, procederán estas al nombramiento de otros.

El señor Labrador ocupó la tribuna y leyó el voto particular que presentaba relativo al presupuesto de ingresos, y el señor presidente anunció que se imprimiría, repartiría y señalaría día para su discusión.

Se mandó pasar a la comisión de presupuestos una esposición del ayuntamiento de Santiago, presentada por el señor Ruiz Pons, en la que pide el restablecimiento de aquel partido administrativo.

El Sr. PRESIDENTE: Orden del día. Continúa la discusión sobre la...

### Ley de reemplazos.

Anunciado por el señor secretario Gonzalez de la Vega que el señor Figuerola había retirado las enmiendas que le presentaba al artículo 153, fueron aprobadas sin discusión los señalados con los números 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160.

Leído el art. 161: Se procederá a formar causas criminales por juzgados ordinarios, con exclusión de todo fuero, al mozo sobre quien recaigan sospechas de haberse mutilado o inutilizado voluntariamente para eludir el servicio.

Resultando cierto el hecho será condenado el que se inutilice a servir en uno de los cuerpos de guarnición fija en las posesiones de Africa por el tiempo ordinario de los ocho años y dos meses, destinándole a ocupaciones compatibles con su situación física. Si la nulidad fuere tan absoluta que el condenado no pudiese prestar ningún género de servicio en dichos cuerpos, sufrirá en las mismas posesiones diez años de presidio. En ambos casos quedará privado de los beneficios que pudieran comprenderle, ya por abono de tiempo de servicio, ya por rebajas decretadas en los indultos generales, y privado también de obtener licencia temporal durante el tiempo de su empleo, y de las retribuciones que se conceden por los artículos 3.º, 4.º y 5.º.

Los que aparecieran cómplices o encubridores de este delito serán condenados a las penas que les correspondan con arreglo a los artículos 63 y 64 del código vigente, bajo el supuesto de que la pena señalada a los autores del mismo es la de presidio mayor.

En lugar del mozo inutilizado ingresará en el servicio un suplente; pero este será dado de baja tan largo como recaiga sentencia ejecutoria en que se declare que la inutilización fue voluntaria. Dijo, como de la comisión.

El Sr. FIGUEROA: La comisión hace una variación en este artículo. Donde dice «sufrirá en las mismas posesiones diez años de presidio», dirá: «la pena que marca el artículo 542 del código penal».

Conforme con lo resuelto por el Congreso, la comisión retira de este artículo las siguientes palabras: «ya por rebajas decretadas en los indultos generales».

El Sr. PEÑA: Es cosa muy grave la formación de una causa criminal: desearía que la comisión añadiera en este artículo una palabra: donde dice: «al mozo sobre quien recaigan sospechas de haberse mutilado», debería decirse: «al mozo sobre quien recaigan sospechas legítimas de haberse mutilado».

También quisiera que en vez de decir, que serán penados los cómplices o encubridores con las penas marcadas en los artículos 63 y 64 del código, se dijera, que los cómplices, cómplices o encubridores fuesen castigados con arreglo a los artículos 60, 63 y 64 del código.

El Sr. LOPEZ INFANTES: La comisión no puede admitir el adjetivo *legítimo* propuesto por su señoría, porque las sospechas en esos delitos no pueden calificarse de legítimas.

Respecto a la tercera parte de este artículo ha dicho su señoría que se debía añadir la palabra *coautor*, para que la ley recayese sobre aquel que ayudase al quinto a mutilarse o inutilizarse. La comisión cree que el artículo está bien claro y terminante y que del proceso resultará quienes son los culpables, sobre los cuales recaerá el debido castigo; pero si su señoría cree que estará mejor añadiendo la palabra *coautor*, y artículo 60, la comisión no tiene inconveniente en ello.

El Sr. ESCOSURA: La comisión está conforme en que se diga: «los que aparecieran cómplices, cómplices o encubridores» y «con arreglo a los artículos 60, 63 y 64 del código vigente».

Puesto a votación el artículo con esta modificación, quedó aprobado.

También lo fué el 162, aceptando la comisión la indicación del Sr. Peña de que se añadiesen en el las palabras «y demás que aparecen culpables».

Leído el art. 165: «Sin perjuicio de las multas que, con arreglo a las leyes, pueden imponer los alcaldes y gobernadores de provincia, se instruirá causa criminal por los juzgados ordinarios, con exclusión de todo fuero, contra las personas que en la ejecución de las operaciones del reemplazo hubieren cometido delito o falta de lo que comprende el código penal».

Si el delito o falta hubiese dado lugar a que se llamara al servicio a un mozo a quien no correspondiese ingresar por su número, a consecuencia de exenciones declaradas a otros mozos, se impondrá por la sentencia condenatoria, además de las penas que marca el código, una indemnización a favor del mozo perjudicado, en la proporción establecida en el artículo anterior.

Tras una ligera discusión quedó aprobado el artículo.

Se leyó el art. 164: «Los facultativos que hubiesen cometido en los reconocimientos y operaciones en que intervienen para el cumplimiento de esta ley algún delito o falta, además de sufrir la pena que correspondiera según el código, estarán obligados al rescimiento de los daños y perjuicios que hubiesen causado indebidamente a alguna persona por efecto del mismo delito o falta».

Dijo:

El Sr. PEÑA: Voy a hacer nada más que una pregunta a la comisión. En el artículo aprobado por el Senado en el año de 51 decía: «si por su delito o impericia, y si quisiera que la comisión se sirviera decirnos por qué razón la comisión ha suprimido esas palabras, porque puede suceder muy bien que un facultativo cometa una falta, bien sea por impericia o por impericia culpable. Como se ha consagrado el principio de indemnización a los particulares, por este artículo se hace de peor condición al Estado, pues no se le indemniza».

El Sr. LOPEZ INFANTES: Cuando un facultativo en el desempeño de sus funciones perjudica al Estado o al particular, responde de los daños causados, y yo creo que no hay necesidad de más explicación en el artículo. Sin embargo, si su señoría insiste en ello, la comisión no tiene inconveniente en que se añada la responsabilidad se extiende también a favor del Estado, y en este caso el artículo concluirá con estas palabras: «Así como al Estado por la falta indebida que causare».

Con esta modificación quedó aprobado el artículo. La comisión retiró por innecesario el 165.

Leído el artículo 166, y después de un debate entre los Sres. Orense, Huelves y Escosura dijo:

El Sr. MANSI: Lo voy a decir no se refiere al artículo 166; pero no estaba en el salón cuando se leyó el 153 a que correspondía, y deseo que no se concluya esta ley sin decir que se consigne por medio de un artículo adicional, o de otra manera, en casos dados pueda el gobierno prorrogar el plazo de dos meses que esta ley concede para el beneficio de la sustitución.

El Sr. SERRANO: El gobierno tiene facultades para esa prórroga, y no hay necesidad de consignarlo en la ley.

Se anunció que el artículo 166 se había con arreglo a lo previsto en los artículos 11 y 14 que han servido de ley para la elección del último reemplazo, quedando sin efecto los artículos 18 y 21 de la presente ley hasta que se haya verificado la quinta de dicho año.

El Sr. HUELVES, ministro de la Gobernación. Los datos que tiene el gobierno de los mozos sorteados este año no están formados con arreglo a la presente ley: por esta razón para el repartimiento de 1856 no pueden tenerse presentes sino los que obran en su poder con arreglo a las disposiciones anteriores.

Hay que aclarar para que no se crea que se introduce aquí una gran novedad.

Puesto a votación el artículo quedó aprobado.

Se leyó el artículo adicional del señor Gomez de la Mata que decía así:

«Los mozos a quienes cupiere la suerte de soldados, si supieren leer y escribir correctamente tendrán un año de rebaja en el tiempo de su empleo».

Apoyado este artículo por el señor Gomez de la Mata, en breves palabras, y no admitido por la comisión, se puso a votación y quedó desechado.

Se leyó el siguiente:

«Concluidas las operaciones de la quinta ante las diputaciones provinciales, darán estas cuenta al gobierno de cualquier caso que haya ocurrido en aquellas, y que no esté previsto en la presente ley».

Admitido por la comisión este artículo, quedó aprobado sin debate terminando en él la ley de reemplazos.

Se anunció que quedaban sobre la mesa las copias de los expedientes sobre varias negociaciones hechas por el señor ministro de Hacienda, y pedidos en una sesión anterior por el Sr. Yañez (D. Manuel).

El Sr. YÁÑEZ (D. Manuel): Creo que estos documentos deberían pasar a una comisión especial.

El Sr. VICE-PRESIDENTE (Portilla): Quedan sobre la mesa, y cualquier señor diputado puede proponer lo que crea conveniente, en los términos que marca el reglamento.

El Sr. YÁÑEZ (D. Ignacio): Quiero que conste que yo voté ayer con la mayoría el artículo constitucional sobre el Consejo de Estado, sin embargo de que mi nombre no aparece en los periódicos.

El Sr. secretario CALVO ASENSIO: La votación de ayer se hizo cuando se retiraban muchos señores diputados y esto produjo alguna confusión que se evitara si los señores diputados tuvieran la bondad de votar desde sus asientos.

Discusión de los artículos constitucionales.

Se leyó el 68 que decía así:

Art. 68.—«Las Cortes escusarán de la sucesión aquellas personas que sean incapaces para gobernar; o hayan hecho cosa porque merezcan perder el derecho a la corona».

«Igual facultad tendrán para escluir de la sucesión en la tutela del rey a las personas que se hallen comprendidas en cualquiera de los dos casos anteriormente expresados».

El Sr. YÁÑEZ (D. Ignacio): Señores, en la presente Constitución como en todas las constituciones monárquicas, se ha establecido que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey, y la ley de sucesión debe llevar los mismos trámites y condiciones que las demás leyes. No sé, pues, porque la comisión propone que sean las Cortes exclusivamente las que hayan de determinar el punto de que se trata. ¿Será tal vez como consecuencia del principio de la soberanía nacional? No lo creo, porque esta no es ley constitutiva, y si lo fuese, no debería hacerse por las Cortes ordinarias; solo las Cortes constituyentes tendrían facultad para hacerlo.

Preciso es, señores, que apliquemos para la formación de las leyes los principios que hemos sentado en la Constitución. Estos principios están corroborados por la legislación civil que fija los casos en que un padre de familia puede heredar a sus hijos. ¿Y por qué el jefe de la familia real no ha de tener ese derecho?

En la práctica me encuentro ninguna razón que haga imposible la aplicación de la doctrina que dejo expresada. El trono es una institución perpetua y sucesoria, y alguna vez una regencia desempeña las funciones del rey, este no puede ser interviniente para la sanción de la ley de que se trata. Así sucesivamente cuando se escusó a D. Carlos y a su familia de la sucesión; y por cierto que no estarán arrepentidos los señores diputados de la intervención que entonces se dió al poder real.

Creo, pues, que la comisión debe reformar este artículo, dando al rey la intervención que debe tener en las demás leyes.

El Sr. HEROS: Para probar que esta ley no es lo mismo que todas las demás, basta leer los artículos que preceden a este, en los cuales se habla de la sucesión a la corona, es decir, que la ley de que se trata se deriva de una disposición constitucional. Cuando se declara a una persona incapaz de reinar, no ha de concurrir esa persona a hacer la ley.

El Sr. YÁÑEZ, don Ignacio: No se trata del rey, se trata de los sucesores.

El Sr. HEROS: Yo no soy padre de familia, pero declaro que primero me dejaría matar que heredar a un hijo si lo tuviera; y ejemplo tenemos en España de una hija que ha heredado su fortuna en cosas que han tocado a su madre. Estas cuestiones son un poco delicadas en el tiempo que alcanzamos. La comisión no ha hecho más que consignar lo establecido por las Cortes de 1813; y si en el año 34 la legítima heredera del trono no hubiera estado en posesión de él, no por eso hubiera dejado de ser válida la exclusión que se hizo de D. Carlos.

Fue aprobado sin discusión el art. 62, que decía así:

«Hasta que las Cortes nombren la regencia, será gobernado provisionalmente el reino por el padre o la madre del rey con el Consejo de ministros que hubiera al tiempo de la vacante».

En defecto del padre o de la madre gobernará provisionalmente el Consejo de ministros.

Se leyó el art. 66 que decía así:

### TITULO X.

Del poder judicial.

«A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer esas funciones las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado».

El Sr. LLANOS: Señores, al ver que en el título X se habla del poder judicial no ha podido menos de llamarme la atención, porque yo creo que esa palabra «poder judicial» no es la que se debe poner en este título, y creo que estaría mejor otra cualquiera. Mi voz es demasiado débil para que pueda ser oída de la comisión; sin embargo, haré algunas ligeras observaciones sobre este punto. En los gobiernos absolutos no creo que haya más que un poder, que es el del rey, porque es quien hace las leyes y las manda ejecutar. En la democracia pura no hay más poder que el del pueblo, porque él es el que hace las leyes y las manda ejecutar. En los gobiernos mixtos hay dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y si hubiera de admitirse un tercer poder, no sería ni concepto el poder judicial, sino el poder del juez, porque los jueces en España no hacen más que aplicar las leyes escritas, y en eso hay alguna poder? Yo no encuentro nada que el poder judicial sea en un capitán general gobernando civil, a quienes se les da facultades para obrar discrecionalmente. Por esta razón me parece a mí sería mucho más propio que en vez de decir en este título «del poder judicial», se dijera «de los tribunales, de la magistratura» o cualquiera cosa, menos poder.

El Sr. SANCHE: Yo estoy infinito que el señor Llanos se haya opuesto a que se diga aquí «del poder judicial», porque no es esa la escuela de su señoría. Todo el partido liberal ha llamado siempre a lo judicial poder, y si otros legisladores le han quitado ese atributo, nosotros hemos creído siempre que era el que le correspondía. En la división de poderes que ha hecho el partido liberal siempre ha dicho: las leyes las hace el poder legislativo, se ejecutan por el poder ejecutivo y se aplican por el poder judicial. Esta es la teoría de los tiempos modernos. ¿Cómo no ha de ser poder el judicial cuando los jueces disponen de la vida y de la hacienda de los ciudadanos? Se dice, en verdad, que con arreglo a las leyes es claro, no faltaba más; pero ¿quién es el que aplica la ley? Dice su señoría que el juez en todo caso debería ser un poder, y yo le digo, que no sería otra cosa que el poder judicial. El jurado lo establece la Constitución para los delitos comunes. Además, en la práctica, ¿quién es el poder que más temen y conocen los pueblos? ¿el judicial? ¿Cómo no había de ser así cuando, repito, es el que condena a muerte y dispone de la hacienda de los ciudadanos?

Concluyo, señores, diciendo que el artículo debe ser aprobado, y que el señor Llanos ha sostenido una cosa que no es de su escuela.

El Sr. LLANOS: Dice su señoría que defendiendo una doctrina que no es de mi escuela, sino del partido moderado. Yo defiendo lo que me parece conveniente sin mirar a qué escuela pertenece, y en cuanto a si me he separado de mis principios, el país juzgará quién de

los dos se ha separado mas de los que siempre hemos profesado.

Yo digo que los jueces no son mas que autómatas, que no hacen otra cosa que aplicar las leyes escritas, y por eso no puedo llamar a lo judicial poder.

La doctrina es que debe conservarse la monarquía, pero rodeada de principios democráticos, y esto es lo que siempre he deseado.

El Sr. SANCHE: Yo concedo que el señor Llanos va mas adelante que yo en el camino democrático, no es necesario que la nación lo juzgue, yo lo digo, y por eso estaba yo su doctrina respecto del poder judicial.

El Sr. LLANOS: El camino que sigo con perseverancia lo aprendí del señor Sancho en su día, y me he mantenido en él, no sé si su señoría ha hecho lo mismo.

Sin más discusión fué aprobado el artículo.

Se leyó el 67, que decía así:

«Las leyes determinarán los tribunales y juzgados que ha de haber; la organización de cada uno; sus facultades; el modo de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos».

Después de un debate en que tomaron parte los señores Orense, Olazaga y marqués de Tabuérniga, quedó aprobado el artículo.

Lo fué sin el 68, que decía:

«Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinen las leyes».

Se leyó el 69 que estaba concebido en estos términos:

«Ningún magistrado o juez podrá ser depuesto de su destino, temporal o perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendido, sino por auto judicial, o en virtud de orden del rey, cuando este, con motivos fundados, le mande juzgar por el tribunal competente».

El Sr. ALVAREZ (D. Cirilo): Señores, en este artículo encuentro yo cierta inflexibilidad que puede dar lugar a que alguna vez se quebre, y por eso voy a permitir hacer algunas observaciones acerca de él.

Euprézate por declarar, que estoy completamente conforme con el principio de inamovilidad que en él se establece.

Pero si ningún magistrado o juez puede ser depuesto de su destino, sino por sentencia ejecutoriada, ni suspendido sino por auto judicial, yo diré a la comisión que puede llegar algún caso, aunque raro, en el que un juez o magistrado se haga indigno de seguir ocupando el puesto que se le ha confiado, no ya por un delito sobre el que pudiera recaer una sentencia, sino por actos de la vida privada, que sin ser penales por la ley, le hagan indigno de la toga que viste. Para ocurrir al conflicto en que pudiera verse el gobierno creo yo que podría establecer la comisión en un segundo párrafo de este artículo, que el tribunal supremo pudiera entender en casos de esta naturaleza, y después de instruir el expediente oportuno, decretar la separación o suspensión del juez o magistrado, que por su conducta privada hubiese dado lugar a ella.

No me sentaré sin indicar a la comisión que en mi humilde opinión deberían suprimirse de este artículo, las palabras temporal o perpetuo, porque hoy no son necesarias en razón a que no se dan esos destinos, como en otro tiempo, con la calidad de perpetuo o temporalmente.

El Sr. OLOZAGA: Tengo la mayor satisfacción en anunciar a las Cortes que la comisión está conforme en la supresión de las dos palabras que ha marcado su señoría, supresión que ya la comisión había pensado hacer, pero que de intento la he dejado que la propuesta viniera de unos labios tan autorizados como los de su señoría.

Con el mismo gusto aceptaría la comisión la enmienda mas grave que propone el señor Alvarez, para que haya un poder autorizado que, en casos como los que he citado, pudiera separar o suspender a los magistrados y jueces pero yo apelo a los profundos conocimientos de su señoría para que mire la cuestión; no solo bajo el aspecto que la ha presentado, sino bajo otro mas grave e importante, el del abuso a que podría dar lugar esa disposición.

Creo, sin embargo, señores, que sin atener al principio de la inamovilidad judicial, se puede dar una facultad disciplinaria al tribunal supremo para que por los medios que establezcan las leyes pueda corregir los abusos a que se ha referido su señoría.

El Sr. ALVAREZ: Yo creo que bastaría la declaración que ha hecho la comisión; sin necesidad de que se escribiese en el artículo, pero como la palabra es fogosa, y pudiera ponerse en duda algún día, bueno sería que se añadiera un segundo párrafo.

El Sr. OLOZAGA: La comisión está conforme en que el Sr. GOMEZ DE LASERNA: Usaré de la palabra breve minutos, no entraré en el fondo de la cuestión, sino únicamente me propongo encarecer mas a la comisión la necesidad que hay de reformar el artículo en el sentido que el señor Alvarez ha expresado, porque no es raro el caso como ha supuesto su señoría, de que lleguen ocasiones en que sea conveniente y necesaria la separación de un juez o magistrado.

Continuó el orador defendiendo el voto del señor Alvarez, y después de rectificar varios señores diputados quedó retirado el artículo.

Se procedió a la discusión del artículo 70 concebido en estos términos:

«Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan».

El Sr. LASERNA: He pedido la palabra para pedir que se quite lo de «personalmente», porque parece que excluye la pena pecuniaria, y esta no debe ser la intención de la comisión.

El Sr. SANCHE: Diciendo personalmente, se entiende de también pecuniariamente.

El Sr. LASERNA: La comisión puede entenderlo así; pero en el uso común, la palabra «responsabilidad personal» se pone en contraposición con la responsabilidad pecuniaria. Poniendo, «responsables con arreglo a las leyes», no puede quedar duda.

El Sr. OLOZAGA: La comisión cree que el artículo está su lugar, y que con la palabra «personalmente» está perfectamente expresada la idea que se quiere.

El Sr. ORENSE: Convento en que esta materia es muy difícil, pero la habilidad está en poner en una manera clara y al alcance de todo el mundo lo que es difícil.







